

## II INSERCIONES

1

**Solicitada por el señor senador Bordón**

Embajada de los Estados Unidos de América  
Embassy of United States of America  
Buenos Aires, Argentina  
Fax (541) 777-0197

Fecha/Date: 2 de noviembre de 1994.

A/To: Doctor Eduardo Menem, presidente provisional. Fax: 953-0067. Honorable Senado de la Nación.

De/From: Pedro G. Erviti. Sección Económica. Economic Section. Tel. (541) 777-1584.

Tema/Subject: Proyecto de ley sobre correos. Página 1 de. Page 1 of 1.

Tenemos entendido que el Senado votará hoy un proyecto de ley que revierte la desregulación de la industria postal establecida por el decreto 1.187/93.

Si el proyecto se convierte en ley, no sólo los costos de FEDEX y UPS subirán, sino también los precios al consumidor argentino.

El nivel de regulación establecido en el proyecto no protege al consumidor y perjudica a la industria. La eficiencia desarrollada en la industria postal durante el último año se perderá, sin implicar beneficio alguno para el consumidor.

Pensamos que está en el interés del público argentino así como en el de las compañías estadounidenses rechazar este proyecto de ley.

Mucho agradecemos su atención en considerar este tema.

2

**Solicitada por el señor senador Romero Feris**

Señor presidente:

La reforma penal en tratamiento, que tiene su origen en un proyecto del Poder Ejecutivo, aprobó este cuerpo y vuelve en revisión de la Cámara de Diputados, introduce dos cuestiones, que a mi entender no guardan una estricta relación y que tienen dos propósitos distintos.

Ambas proponen limitar el tiempo de encarcelamiento de aquel que teniendo prisión preventiva no cuenta con sentencia. Y lo hace de dos maneras: una, mediante la excarcelación del imputado al término de los dos años de detención, en forma casi automática, según el proyecto aprobado por este cuerpo, punto éste que ha sido reformado en forma satisfactoria por la Cámara de Diputados; otra, beneficiándolo con el doble cómputo del tiempo de prisión o reclusión.

Para el tratamiento de este tema debe meritarse cuál es el fin perseguido en el proyecto, puesto que tiene una importante repercusión social, sobre todo en momentos en que se observa el incremento de la delincuencia en todo el país.

Así, debe tenerse perfectamente en claro si el objetivo es que los detenidos sin condena puedan recuperar la libertad al cabo de los dos años, o que se agilicen los pro-

cesos y se preserve la integridad de la persona que se presume inocente.

Creo que un objetivo desecha al otro, pues contrariamente a lo que este proyecto propone en teoría, en la práctica ambos fines serán contrapuestos.

En efecto, señor presidente, el proyecto aprobado por este cuerpo propicia que cumplidos los dos años y seis meses de detención —sin que exista condena— automáticamente quedará excarcelado quien esté imputado en una causa, cualquiera sea la gravedad del delito.

De esta forma no tengamos la menor duda que el mejor abogado defensor será aquel que logre, mediante excepciones, recursos y otras defensas procesales, llegar a los dos años y seis meses sin que el juez de la causa pueda dictar sentencia, consiguiendo así que su defendido logre la libertad ambulatoria y burle el sentido de la ley penal.

Debemos tener en cuenta que quienes actualmente cumplen prisión preventiva son aquellos procesados por uno o más delitos cuya pena excede los 8 años de prisión, o bien tenga condenas anteriores. Así podrán gozar de este nuevo beneficio quienes estén acusados por delitos graves, tales como homicidio doloso en todas sus formas, secuestro extorsivo, robo agravado, traición a la patria y otros delitos de semejanza gravedad.

La misión de administrar justicia ha sido, desde los comienzos de las sociedades humanas, atributo propio de la soberanía. El Estado es el censor legal de las pasiones humanas y el centinela avanzado de la moral de las naciones civilizadas.

Actualmente, nuestros tribunales han aplicado el beneficio de dos años como máximo para aquellos procesados que no tuvieron condena pero no en forma automática, sino luego de un estudio pormenorizado de cada caso.

Así, la sana doctrina y la jurisprudencia penal aconsejan no tener en cuenta aquellos actos procesales dilatorios que intente el defensor, a los fines del cómputo de la prisión preventiva, conocidos también como "chicanas procesales" dentro del ámbito tribunalicio, que sólo tienen como objeto obstaculizar el proceso.

Es decir que actualmente se concede el beneficio pero restándole el tiempo insumido en actos procesales que tienen origen en una solicitud del procesado, cuando a juicio del tribunal hayan tenido como efecto retrasar el curso del proceso.

Por ello, aprobar este proyecto es alentar la deslealtad procesal ante el tribunal, en detrimento del fin perseguido por la ley y la justicia, el cual es la investigación de los hechos y el castigo del delito.

Sin lugar a dudas, los procesos se volverán más lentos en los casos de delitos graves en que la situación del imputado se encuentre comprometida, debido a que la defensa tratará por todos los medios de que no haya sentencia durante dos años y seis meses.

Una justicia lenta, un proceso prolongado y tedioso, conlleva a la injusticia de mantener en la incertidumbre a quien se encuentra privado preventivamente de su li-

bertad, como también a la gran injusticia de no hacerse justicia.

Por ello, la víctima de un delito que no ve llegar a tiempo una sentencia condenatoria, descreerá de nuestro sistema judicial y del orden jurídico en general. Y esto es lo más grave que le puede suceder a un pueblo.

La reforma efectuada por diputados recepta la jurisprudencia de nuestros tribunales y mi opinión en este aspecto, haciendo más restrictivo este punto que, por su repercusión social, resulta sumamente delicado.

Pasando al otro instituto, el llamado comúnmente 2 por 1, tampoco cuenta con mi apoyo.

Este sistema es realmente paradójico, pues sólo favorecerá a quien luego resulte condenado, pero nada cambiará para quien sea absuelto por el tribunal. Es decir que lejos de proteger los derechos humanos le estamos otorgando un beneficio a quien agregue a la sociedad, mediante cualquiera de los delitos previstos en el código penal.

Nuestra justicia toda —la penal no es la excepción— se encuentra en crisis. El estado en que se encuentra la infraestructura edilicia del Poder Judicial resulta francamente alarmante. Los edificios se cierran por falta de seguridad; ello ha sucedido en la justicia laboral por muchos meses y respecto de la civil estamos a casi un año del cierre de uno de los principales edificios en esta Capital Federal y aún continúan algunos juzgados sin funcionar.

Actualmente también se teme por la seguridad de un edificio que alberga a juzgados comerciales, donde los expedientes que se encuentran en pleno trámite son llevados al archivo —ubicado en la planta baja— para eliminar peso a los pisos superiores.

A ello se suma la baja remuneración de sus empleados, que no tienen la categoría de funcionarios, pero que el magistrado delega en ellos la responsabilidad de llevar causas, dirigir audiencias y demás tareas esenciales para llevar adelante un juzgado.

Con estos elementos no puede esperarse sino una justicia lenta, un proceso penal prolongado y tedioso, por falta de material humano y tecnológico.

Podré no ser original al decir que "la justicia tardía no es justicia", pero es una frase que encierra una verdad irrefutable. Cuando el ciudadano no encuentra respuestas en el Poder Judicial, lamentablemente las buscará por mano propia o asumirá estoicamente la impunidad del delincuente.

Por ello, creo firmemente que no debe buscarse la solución en proyectos que permitan la existencia de un mayor grado de impunidad, sino en el fortalecimiento de una justicia digna que permita la atención y resolución de las causas a su estudio.

El problema del abarrotamiento de los juzgados penales como también el hacinamiento en los institutos penitenciarios no lo solucionaremos con este proyecto que ataca los efectos pero no las causas.

El forzoso trato y contacto con los criminales corrompe a los hombres relativamente honestos y empeora a los dudosos y vacilantes.

En las cárceles los delincuentes consuetudinarios y los principiantes se confunden, se reúnen, cambian ideas,

recíprocamente se depravan, aprenden sus engaños y donde se crean verdaderas bandas que planifican nuevos golpes para cuando se encuentren en libertad.

Creo que sería más conveniente para el país cumplir acabadamente con otra disposición mucho más importante. Me refiero al artículo 5° inc. 4 que prescribe que los procesados deben estar separados de los condenados salvo en circunstancias excepcionales y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.

Es evidente que haremos mucho más por el detenido preventivamente si adoptamos una decisión de fondo en materia de política carcelaria que estableciendo un límite de detención como el que aquí se propone.

Para un inocente es mucho más grave convivir durante dos años con delincuentes, en la realidad de los actuales institutos penitenciarios, que pasar mayor tiempo en prisión pero en un lugar más digno y adecuado a su condición de inocente, hasta que se pruebe lo contrario.

El inciso 1° del artículo 5° del Pacto de San José de Costa Rica establece el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral. Y yo me pregunto, señor presidente, ¿quién se puede sentir protegido compartiendo la celda con peligrosos delincuentes condenados a varios años de reclusión?

No será necesario esperar dos años. En menos de dos meses habrá sufrido violencia física y moral, y deberá tener una gran fortaleza espiritual para mantener la integridad psíquica.

Esa es la realidad del sistema penitenciario argentino y nada se hace por reparar semejante anomalía.

El Estado nacional debe emprender ya mismo una política carcelaria y judicial coordinada para dotar a nuestra Nación de los elementos necesarios, tanto en materia de recursos humanos como en los materiales para que pueda funcionar correctamente.

Encuentro razón a quienes piensan en aquellos que se hallan transitoriamente privados de su libertad, cuando debe prevalecer la inocencia, pero no creo que pueda serle útil a ese inocente que se le compute doblemente el tiempo de detención en prisión preventiva.

Su inocencia deberá conllevar al sobreesimiento, por lo que este instituto no lo favorecerá. En cambio sí beneficiará a quien resulte condenado, toda vez que se acortará sensiblemente el tiempo de reclusión.

En un sistema de plenas garantías como el nuestro, donde el ciudadano las ejerce mediante el principio de inocencia, la impugnación de los actos procesales y la vía recursiva de las decisiones del juez por ante la cámara de apelaciones o ante el máximo tribunal —por decisiones tales como la denegación del beneficio de excarcelación— el límite de dos años propuesto tendrá como efecto que los abogados defensores planteen innumerables impugnaciones y recursos, promuevan recusaciones y demás defensas con el único fin de obstaculizar el trámite procesal, dilatando sucesivamente la posibilidad del dictado de la sentencia.

No tengo la menor duda que si actualmente los procesos penales duran demasiado tiempo, la aprobación de este proyecto producirá que ninguno tarde menos de dos años y medio, por lo menos en aquellos casos de delitos graves donde el procesado sea culpable.

Creo, entonces, que debemos tener en cuenta principalmente al sujeto pasivo, es decir, al ciudadano que cumple la ley y es potencial o efectiva presa del agente delictivo.

¿Cómo podremos explicarle a la víctima de un delito que quien le produjo el daño ha sido excarcelado porque la justicia se encuentra abarrotada de expedientes?

Entonces, si tenemos en cuenta a la víctima potencial, es decir a la sociedad toda, como la parte a quien debemos dar una respuesta, no puedo sino oponerme a este proyecto.

El hombre de la calle necesita respuestas concretas a su falta de seguridad personal, la de su familia y la de sus bienes.

Jiménez de Asúa, refiriéndose a otro instituto, pero que guarda similitud con el tema en tratamiento, expresó que "la condena condicional se funda en un enorme error: la determinación a priori de la carencia de peligro de ciertos criminales. El acto insignificante de un delincuente primario puede ser un paréntesis aislado en su vida, pero también puede ser el síntoma primero de su estado peligroso de naturaleza continua. Esto a priori no puede decidirse. Renunciar, en tal caso, a la medida correctiva, educadora y de defensa que la pena representa, es aumentar la criminalidad en vez de restringirla".

No se pretende tomar al pie de la letra este pensamiento, que fue expresado en otro tiempo y en otras épocas, pero tampoco pasar al otro extremo.

Creo que el proyecto que sobre el tema ha presentado el bloque radical coincide esencialmente con la postura del bloque autonomista y que he expuesto por el presente.

Esta iniciativa toma en cuenta la legislación italiana básicamente, y también la jurisprudencia de nuestros tribunales.

Establece un plazo mayor que el propuesto por el despacho de comisión y gradual respecto a la gravedad de los delitos. Pero lo más importante es que elimina la automatización en la aplicación del instituto y deja al arbitrio judicial para que juzgue cada caso en concreto.

En síntesis, las críticas expresas por mi bloque al proyecto oficial se encuentran recogidas en este proyecto.

Es por ello, señor presidente, que voy a votar negativamente el proyecto del Poder Ejecutivo y sus modificaciones.

la necesidad de brindar un amplio apoyo al productor, tendiente a garantizar la mejor calidad y selección de la miel.

Es en el marco de esta preocupación que el CERIDE de la ciudad de Santa Fe ha elaborado un proyecto, presentado ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), que busca crear en el ámbito del CERIDE un Instituto de Desarrollo Apícola Integral que busca hacer frente a los tres grandes problemas que debe afrontar la actividad apícola en la actualidad, a saber:

1º — El problema sanitario: dado que por la presencia de numerosas plagas que afectan a las abejas y que en la actualidad no están siendo debidamente tratadas por los productores, quienes no les prestan la atención debida a tales enfermedades, ya sea por desinformación o por falta de medios.

2º — El problema de comercialización: dado por el hecho de que la actividad se encuentra en manos de pequeños productores que trabajan individualmente y que poseen escasa información respecto de la calidad de la miel que producen, todo lo cual les permite a los intermediarios pagar a los productores precios muy por debajo de los del mercado para miel de la calidad entregada.

3º — El problema de producción: basado en que los pequeños productores carecen de los conocimientos técnicos necesarios para mejorar la calidad de la producción, la falta de diversificación de la misma y el desconocimiento por parte del productor de la calidad del producto que está vendiendo.

Todos estos problemas se solucionarán a través del proyecto presentado por el CERIDE a la ONUDI. En efecto, el Instituto que por este proyecto se propone crear buscará brindar:

1º — Una capacitación continua del productor para mejorar su explotación, priorizando la calidad sobre la cantidad, buscando crear "nichos" en el mercado internacional que sean aprovechados por el productor nacional.

2º — Capacitación para efectuar los tratamientos sanitarios de una forma racional, lo cual permitiría poner en el mercado un producto totalmente natural.

3º — La creación de un centro de tipificación y caracterización de mieles de las diferentes zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos —las mayores productoras— que brinde al productor una valoración del producto local.